

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintinueve (29) de marzo de dos mil veintidós (2022)

DEMANDANTE	: LUZ DARY LOPEZ LOPEZ
DEMANDADO	: COLFONDOS S.A
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO (AUTO), RECURSO DE QUEJA
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-009-2016-01244-01
RADICADO INTERNO	: 029-23
DECISIÓN	: DECLARA BIEN DENEGADO RECURSO
ACTA NÚMERO	: 068

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a resolver el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

ANTECEDENTES

Mediante auto del **13 de octubre de 2016**, el juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, dispuso librar mandamiento de pago en favor de la señora DIANA MARCELA MORENO CARDONA y en contra de la sociedad TRASLADO INTEGRAL MEDICALIZADO S.A (fls 61 a 64, del archivo 04, PDF 1), por concepto de la condena laboral proferida el 27 de julio de 2014, proferida por el Juzgado Sexto Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín y el 10 de junio de 2016 proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín por los siguientes valores:

- La suma de \$3.876.498 por concepto de mesadas pensionales, suma que deberá ser actualizada al momento del pago por Protección S.A.
- \$1.549.595 por concepto de valor faltante en el pago de la liquidación total de prestaciones sociales.

- La indemnización por el no pago oportuno de las prestaciones sociales en la forma indicada en el artículo 65 del C.S.T desde el 14 de noviembre de 2009.
- \$1.232.000 por concepto de agencias en derecho del proceso de primera instancia.

Posteriormente mediante auto del **27 de marzo de 2017**, y aclarado mediante providencia de esta Corporación del 23 de octubre de 2018, (fls 70 a 76, del archivo 04, PDF 1), se dispuso lo siguiente:

“PRIMERO: CORREGIR el mandamiento de pago Nro 0396 del 13 de octubre de 2016 en su parte resolutive en su numeral primero así:

Librar mandamiento de pago en favor de la señora DIANA MARCELA MORENO CARDONA y en contra de la sociedad TRASLADO INTEGRAL MEDICALIZADO S.A (fls 61 a 64, del archivo 04, PDF 1), por concepto de la condena laboral proferida el 27 de julio de 2014, proferida por el Juzgado Sexto Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín y el 10 de junio de 2016 proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín por los siguientes valores:

- \$1.549.595 por concepto de valor faltante en el pago de la liquidación total de prestaciones sociales
- \$1.232.000 por concepto de agencias en derecho del proceso de primera instancia.
- La suma de \$173.191 por concepto de expensar o gastos del proceso ordinario (fls 462), liquidados en auto del 22 de julio de 2016.
- La suma de \$3.876.498 por concepto de mesadas pensionales, que precisó Protección S.A como calculo actuarial correspondiente a las causadas antes del 31 de mayo de 2014, (fls 464 a 465); debiendo el fondo actualizar el cálculo actuarial al momento en que realice el pago la parte ejecutada.
- La indemnización por el no pago oportuno de las prestaciones sociales en la forma indicada en el artículo 65 del C.S.T desde el 14 de noviembre de 2009.

SEGUNDO: CORREGIR el mandamiento de pago Nro 0396 del 13 de octubre de 2016 en su parte resolutive en su numeral segundo así:

ORDENAR notificar este mandamiento de pago a la ejecutada TRASLADO INTEGRAL MEDICALIZADO S.A –AMBULANCIAS TIME S.A con NIT 900229586-3 mediante citación para notificación personal, con la advertencia de que dispone del termino de cinco (05) días para efectuar el pago y diez (10) días para proponer excepciones, si a ello hubiere lugar, de

conformidad con lo dispuesto en las consideraciones de este escrito.

TERCERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor de DIANA MARCELA MORENO CARDONA con C.C 43.996.633 y en contra de la sociedad TRASLADO INTEGRAL MEDICALIZADO S.A- AMBULANCIAS TIME S.A con NIT 900229586-3, por concepto de \$173.191 como expensas o gastos del proceso ordinario (fls 462), que harán parte del valor total de las costas del proceso ordinario, así como la obligación de pagar los intereses legales establecidos en el artículo 1617 del C.C por todo el valor de las costas del proceso ordinario equivalente a la suma de \$1.405.191 desde la ejecutoria del auto que las impuso, esto es, desde el 29 de julio de 2016 hasta el momento efectivo del pago de la obligación”.

Según constancia de notificación personal el 20 de mayo de 2017, fue notificado al señor JOHN JAIRO VELASQUE CARMONA del auto del 13 de octubre de 2016 mediante el cual se libró mandamiento de pago inicial. (fls 93, del archivo 04, PDF 1)

Posteriormente y en lo que concierne al conocimiento de la segunda instancia en esta oportunidad el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, mediante auto del 25 de noviembre de 2021, (PDF 05 del expediente digital), dispuso de forma textual lo siguiente:

“En el presente proceso ejecutivo conexo seguido por DIANA MARCELA MORENO CARDONA en contra de TRASLADO INTEGRAL MEDICALIZADO S.A.-AMBULANCIAS TIME S.A “EN LIQUIDACIÓN” - en escrito arrimado vía correo electrónico el **12 de noviembre de la presente anualidad**, documento 3 del expediente digital, la apodera judicial ejecutante presenta solicitud de modificación o revocatoria o recurso de apelación contra el auto proferido el 8 de noviembre de 2021, en el cual se le requirió para que procediera a la notificación del mandamiento de pago.

Respecto al auto citado, la parte ejecutante, a través del correo electrónico el 12/11/21 (archivo 03 del expediente digital) solicita se modifique o revoque la decisión o se le conceda apelación respecto a la decisión adoptada, esgrimiendo entre varios aspectos, que la parte ejecutada se encuentra notificada y que debe conminarse a la parte ejecutada y/o a quien corresponda al cumplimiento de las órdenes impartidas en la presente ejecución.

Cierto es que en la carpeta 01, cuaderno 01, archivo 003 a folios 551 del expediente digital se encuentra notificada la parte ejecutada de la obligación librada tanto del primer mandamiento de pago librado el 13 de octubre de 2016 y así se consignó en el acta de notificación, **sin embargo**, dicho Mandamiento de Pago fue corregido mediante otra providencia, que incluso involucra un segundo mandamiento de pago con fecha del 27/03/2017, sin que del mismo se haya dejado constancia en aquella acta elaborada, que se le haya notificado; razón por la cual, se le requirió a la parte para que procediera a notificar el Mandamiento de Pago, pues debe tenerse en cuenta que en el

proceso ejecutivo todo es rogado no puede ser de oficio la actuación que se imparta en el mismo.

En cuanto al recurso de apelación interpuesto de no modificarse o revocarse la decisión adoptada en el auto del 8/11/21, habrá de declararse improcedente, por cuanto el auto recurrido no es del tipo frente a los cuales es procedente dicho recurso, tal como lo consagra el art. 65 del CPTSS; todo lo contrario, el auto obrante en el archivo 02 del plenario digital, se evidencia que el mismo se enmarca perfectamente entre los que se denominan autos de sustanciación y conforme lo reglado en el artículo 64 del CPTSS, contra estos autos no procede recurso alguno.

La memorialista, también hace solicitud de “que se proceda a ordenar expedir y enviar, a quien corresponda y entre otras, a la Superintendencia de Sociedades de Colombia, la comunicación en la que se informe de la existencia del crédito, de la existencia del presente proceso, del decreto de medidas cautelares y en la que se requiera darle al crédito el tratamiento conforme lo dispone el art 157 del C.S.T., es decir, como perteneciente a la primera clase que establece el artículo 2495 del Código Civil y con privilegio excluyente sobre los demás”; indicándosele a la parte que es ésta quien debe individualizar a quién se le debe realizar el requerimiento que predica y no simplemente limitarse a señalar que “a quien corresponda”, sin embargo, se procederá a comunicar a la Superintendencia de Sociedades de Colombia, de la existencia del crédito, que consta en los dos mandamientos de pago, proferidos , uno el 13/10/16 y el otro el 27/03/17, en los términos de la solicitud de la parte actora.

Refiere igualmente, la apoderada de la parte ejecutante en el memorial del 12/11/21, que “...Ante el incumplimiento por parte de la demandada de las órdenes comunicadas mediante oficio 513 del 27 de marzo de 2017 y 834 del 09 de junio de 2017, se proceda de conformidad con lo ordenado en el numeral 6 del art 593 del C.G.P, aplicable por disposición del art 145 del C.P.T y de la S.S., y a compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación en contra del representante legal y de los miembros de la junta directiva de la entidad demandada, por el incumplimiento de las órdenes comunicadas mediante oficios 513 del 27 de marzo de 2017 y 834 del 09 de junio de 2017 y por el incumplimiento de las sentencias proferidas en primera y en segunda instancia dentro de este proceso que presuntamente configuran la conducta delictiva denominada fraude a resolución judicial o administrativa de policía descrita en el art. 454 del Código Penal.”; respecto a lo cual este Despacho **no se accede**, por tanto, no se observa causal alguna para tal fin en el art 593 del CGP como lo afirma la peticionaria; ni tampoco, el no cumplimiento de la sentencia que hoy sirve de base de recaudo, se configura como causal para efectuar dicha compulsas, dado que para ello contempla la Jurisdicción Ordinaria Laboral el proceso ejecutivo, sin embargo habrá de advertirse que se encuentra plenamente facultada la parte para interponer las denuncias que a bien considere y deberá remitir copia de las actuaciones surtidas ante la Jurisdicción Penal en caso de que así lo haga, para que obre dentro del presente asunto.

Igualmente, manifiesta la parte ejecutante en el multicitado memorial del 12/11/21 que se “...requiera a la parte ejecutada para que dé cumplimiento a lo comunicado mediante oficios 513 del 27 de marzo de 2017 y 834 del 09 de junio de 2017, comunicándole expresamente que el embargo se extiende a los dividendos, utilidades, intereses y demás beneficios que al derecho embargado correspondan y que con ellos, desde que fue comunicada la orden de embargo, deberá constituir certificado de depósito a órdenes del juzgado, so pena de hacerse responsable de dichos valores y para que comparezca al

despacho a notificarse personalmente de la providencia del 27 de marzo de 2017 como fue ordenado en decisión del 15 de enero de 2018, confirmada mediante providencia del 06 de noviembre de 2018...”; a esta solicitud habrá de accederse, primero **ampliando el embargo** ya decretado en los autos proferidos y comunicados mediante los oficios 513 del 27 de marzo de 2017 (fls. 571, cuaderno 03 de la carpeta 01 del expediente digital) y el 834 del 09 de junio de 2017 (fls. 571, cuaderno 03 de la carpeta 01 del expediente digital), **se extiende a los dividendos, utilidades, intereses y demás beneficios que al derecho embargado correspondan** y qué con ellos, deberá constituir certificado de depósito a órdenes del juzgado en la cuenta del Banco Agrario del Juzgado con número 050012032009, so pena de hacerse responsable de dichos valores.

De igual forma, dando respuesta a este último petitum de la parte ejecutante en aquel memorial, como segundo, habrá de requerirse a través de oficio, a la ejecutada para que se notifique de la providencia del 27 de marzo del 2017 que contiene corrección al mandamiento de pago del 13 de octubre del 2016 y otra obligación no contenida en el mandamiento notificado.

Librese por la Secretaría, los oficios pertinentes y gestiñese cada uno por la parte ejecutante, a través del correo electrónico conforme lo dispuesto en el Dto. 806 del 2020 o de las direcciones que aparezcan en el certificado de existencia y representación a través de correo certificado; anexando posteriormente en archivos en PDF al correo institucional j09labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co”

En virtud de lo anterior la apoderada de la parte ejecutante mediante escrito del **30 de noviembre de 2021**, solicitó reponer la decisión del 25 de noviembre de 2021 y, en su lugar, proceder a tener por notificada de las providencias del 27 de marzo de 2017 y del 09 de junio de 2017, por conducta concluyente, a la demandada, a tener por vencidos los términos para proponer excepciones de fondo dado el transcurso de aproximadamente 3 ó 4 años sin pronunciamiento alguno por parte de la ejecutada, a requerirla para que dé cuenta de la tomada de nota del embargo de las acciones y para que deposite los dividendos, utilidades, intereses y demás beneficios que al derecho embargado correspondan, desde que le fue comunicada la orden de embargo, a proceder de conformidad con lo ordenado en el numeral 6 del art 593 del C.G.P, aplicable por disposición del art 145 del C.P.T y de la S.S., a compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación en contra del representante legal y de los miembros de la junta directiva de la entidad demandada, por el incumplimiento de las órdenes comunicadas mediante oficios 513 del 27 de marzo de 2017 y 834 del 09 de junio de 2017 y por el incumplimiento de las sentencias proferidas en primera y en segunda instancia dentro del proceso que presuntamente configuran la conducta delictiva denominada fraude a resolución judicial o administrativa de policía descrita en el art. 454 del Código

Penal y a pronunciarse sobre la solicitud de decreto y practica de embargo sobre los bienes muebles de la demandada que se encuentran en su sede principal. En subsidio de lo anterior solicita que se expida copia de la providencia del 8 de noviembre de 2021 y de las demás piezas conducentes del proceso para efectos de interponer y sustentar el recurso de queja.

Las peticiones anteriores contentivas de recurso de reposición en subsidio el de queja, contra el auto proferido el 25 de noviembre de 2021, que resolvió solicitudes y negó recurso de apelación fueron resueltas por el juzgado mediante auto del **24 de enero de 2022**, (PDF 08), reiterando que la notificación del mandamiento de pago debe hacerse al ejecutado de forma personal atendiendo a lo consagrado en los artículos 41 del C.P.T y ss, y 290 del C.G.P, y que para el caso bajo estudio la primera providencia que debe ser notificada personalmente consta de las providencias emitidas el 13 de octubre de 2016 y el 27 de marzo de 2017, precisando de esta forma que solo existe una notificación al ejecutado de forma parcial al haberse notificado mediante acta del 20 de mayo de 2017, solo la providencia del 13 de octubre de 2016, faltando por notificar la del 27 de marzo de 2017, y que por dicha razón, antes bien, la insistencia del despacho en notificarse en debida forma el mandamiento ejecutivo pretende asegurar los derechos al debido proceso, derecho de defensa y contradicción de las partes.

Además de lo manifestado se precisa que no es posible tener por notificado por conducta concluyente al ejecutado como lo pretende la apoderada recurrente pues no existe ninguna prueba que, de cuenta de ello, indicando que tampoco sería procedente tener por notificada la providencia del 27 de marzo de 2017 por Estados, y respecto a la solicitud de compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación, indicó que dicha solicitud ya fue resuelta mediante auto del 25 de noviembre de 2021.

Por ultimo indicó que a efectos de dar continuidad al trámite que corresponda y frenar la actitud renuente de la parte actora para notificar de forma adecuada al ejecutado, se ordenó REQUERIRLA para qué en el término improrrogable de quince (15) días, allegara certificado de existencia y representación legal de la sociedad ejecutada actualizado (expedición no mayor a 30 días), con el

fin de verificar la dirección electrónica y así, sea el despacho quién proceda a notificar el mandamiento de pago al ejecutado en la forma dispuesta por el Decreto 806 de 2020.

Y concedió el recurso de QUEJA contra el auto del 25 de noviembre de 2021, que negó el recurso de apelación formulado por la apoderada de la ejecutante que interpuso en contra del 8 de noviembre de la misma anualidad.

RECURSO DE QUEJA

Como fundamento del recurso de queja la apoderada de la parte ejecutante mediante escrito del **27 de enero de 2022**, (PDF 07 del expediente), se indica lo siguiente:

Que continúa equivocándose el juzgado cuando persiste en enrostrarle a la parte demandante una responsabilidad que no tiene indicando que *“para evitar nulidades de orden procesal y sustancial; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 del CPTSS, esta dependencia judicial adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto a los derechos fundamentales ha requerido en varias oportunidades a la ejecutante para que cumpla con la carga procesal que le corresponde, como es, citar al ejecutado para que se notifique de forma adecuada del mandamiento ejecutivo, es decir, de forma total y no parcial”* pues indica que de acuerdo con la actuación procesal la parte demandante no tiene esa carga, ni hay lugar a requerirla para el efecto, al haberse practicado la diligencia de notificación personal del mandamiento de pago, aunque parcial, por causas no imputables a la parte demandante.

Que el juzgado debe comprender que el error que cometió cuando efectuó la notificación personal del mandamiento de pago a la demandada en este proceso, no provino de la parte demandante, por lo tanto, no le es imputable, no es responsable de enmendarlo y no tiene ningún deber al respecto; y que en este sentido el responsable de enmendar el error cometido al momento de la notificación personal es el Juzgado, pero debe hacerlo, no con criterios personales de lo que es justo o injusto, sino con sustento en las normas

jurídicas, esto es, con fundamento en los artículos 132, 133 numerales 04 y 08, 134 y 135, todos del C.G.P.

Que, con fundamento en las normas anteriores, es la parte demandada quien es la legitimada para realizar la solicitud de nulidad, no la parte demandante, tampoco le es dado al Juzgado desconocer, como lo hizo en la providencia del 08 de noviembre de 2021 la notificación personal, aunque parcial, del mandamiento de pago que, obra en el expediente, u ordenar rehacerla, como lo hizo en la providencia del 25 de noviembre de 2021 y lo hace en la providencia del 24 de enero de 2022.

Aclara que si bien es cierto que en el escrito enviado por la parte demandante el 12 de noviembre de 2021 al correo electrónico del Juzgado, ésta solicitó requerir a la parte ejecutada “para que comparezca al despacho a notificarse personalmente de la providencia del 27 de marzo de 2017”; también lo es, que en el escrito enviado el 30 de noviembre de 2021 indicó que ello fue por error; y aclara que lo que pretendió expresar en esa oportunidad fue que “y aunque, por error, la parte demandante solicitó que se requiriera a la parte ejecutada “para que comparezca al despacho a notificarse personalmente de la providencia del 27 de marzo de 2017 como fue ordenado en decisión del 15 de enero de 2018, confirmada mediante providencia del 06 de noviembre de 2018” hoy se retracta de esa solicitud.

Que además solicitó corregir el acto de notificación a la demandada y aunque por error, el 12 de noviembre de 2021, solicitó que para este efecto fuera requerida, hoy se retracta, porque la situación debe resolverse conforme a derecho, conforme a las disposiciones de la Ley (literales C y E del art 41 del C.P.T y de la S.S.); todo lo anterior, porque como puede observarse en el expediente, el Juzgado ha incurrido en múltiples imprecisiones al momento de expedir el mandamiento de pago, de decretar y practicar medidas cautelares, de notificar el mandamiento de pago, de dejar sin efectos las actuaciones, de ordenar rehacerlas y de requerir a la parte demandante que, además de incrementar, sin necesidad, su carga obligándola a solicitar, aclaraciones, correcciones y/o adiciones, a interponer los recursos de ley y demás

actuaciones con las que se ha pretendido que lo actuado se ajuste a lo normado y la ha sumergido en la confusión por la falta de apego a lo normado.

Que además el juzgado debe comprender, en cuanto a la notificación por conducta concluyente, que, en términos jurídicos, la palabra conducta se refiere tanto a la activa o por acción, como a la pasiva o por omisión y que las situaciones a las que se refiere el art 301 del C.G.P., para entender realizada la notificación por conducta concluyente, no son taxativas o únicas, que lo son es a modo de ejemplo, de acuerdo a voces de la jurisprudencia de la Corte Constitucional plasmada en las sentencias C-196 de 2016 y C-978 de 2018 en las que se ha analizado la constitucionalidad de las normas que consagran la notificación por conducta concluyente y en las que ha concluido que este tipo de notificación parte de una inferencia razonable de conocimiento de la providencia y, en general, de la existencia del proceso, que deriva la consecuencia jurídica de generar los efectos de notificación y que la revisión del expediente, también supone realizada la notificación por conducta concluyente.

Que en el caso en concreto resalta que la parte demandada además de estar enterada de la existencia del proceso, conoce la demanda, porque se le efectuó y existe una notificación personal del auto por medio del cual se libró mandamiento de pago, aunque parcial, y se le entregó copia de la demanda, lo que hace suponer, de manera razonada, la revisión del expediente y por ende efectuada la notificación por conducta concluyente en términos de la Corte Constitucional.

Que además existen las constancias de que la demandada efectivamente recibió los oficios 513 y 834 expedidas por Servientrega S.A. y de que, con posterioridad a la notificación personal parcial del auto por medio del cual se libró mandamiento de pago, fueron notificadas por Estado las providencias del 09 de junio de 2017, 15 de enero de 2018, 23 de octubre de 2018, 06 de noviembre de 2018, 26 de noviembre de 2018, 21 de febrero de 2019, 08 de noviembre de 2021, 25 de noviembre de 2021 y 24 de enero de 2022; todo lo cual, aunado a la prohibición de resolver las dudas en contra del trabajador y en favor del empleador, impide considerar, que no puede entenderse la parte

demandada como notificada por conducta concluyente porque el hecho de no haber presentado excepciones no necesariamente es indicativa de falta de notificación.

Que, en resumen, lo decidido en las providencias del 08 y 25 de noviembre de 2021 y del 24 de enero de 2022 fue desconocer, invalidar o anular la notificación existente y ordenar rehacerla desconociendo que al dejar sin efectos, anular o como quiera llamarse las actuaciones efectuadas mediante dichas providencias y al rehacerlas, como lo dispone el Juzgado, se causa grave perjuicio procesal y sustancial a la demandante y desconociendo sus implicaciones y soluciones que pueden darse en el Estado Social de Derecho.

En orden de lo anterior indica que la solución es la notificación personal parcial del mandamiento de pago al demandado efectuada por el Juzgado, la cual está prevista expresamente en los literales C y E del art 41 del C.P.T y de la S.S. y en los arts 132 y ss del C.G.P. aplicables por disposición del art 145 del C.P.L y de la S.S. que dotan imparcialmente a las partes de los mecanismos necesarios para el ejercicio pleno de su derecho de defensa y de contradicción, y que la solución, nunca puede ser la prevista por el funcionario judicial en desarrollo de sus criterios personales de justicia o de injusticia, porque con ellas para salvaguardar el derecho de defensa y de contradicción de la demandada, como en el caso en concreto, se desconoce el derecho fundamental al debido proceso de la demandante, en cambio, las soluciones previstas en la ley, garantizan y salvaguardan los derechos de defensa, de contradicción y, en general, el derecho fundamental al debido proceso de todas las partes involucradas.

Además indica que, ha omitido el Juzgado pronunciarse sobre la solicitud de medias cautelares enviada por la parte demandante el 17 de noviembre de 2021 al correo electrónico del Juzgado; que segundo, verificando que en la providencia del 24 de enero de 2022 se le reclama a la demandante el certificado de existencia y representación de la demandada, se informa que fue aportado y satisfecho el actual requerimiento con el escrito enviado por la parte demandante el 12 de noviembre de 2021 al correo electrónico del juzgado y que, de acuerdo con lo expuesto, el error que se cometió cuando se

efectuó la notificación personal de la demandada en este proceso, no provino de la parte demandante, por lo tanto, no le es imputable, no es responsable de enmendarlo y no tiene ningún deber o carga al respecto y tercero, que es cierto lo manifestado en la providencia del 24 de enero de 2022 respecto a que la solicitud de compulsas de copias a la Fiscalía General de la Nación fue resuelta mediante auto del 25 de noviembre de 2021, pero también es cierto que la parte demandante mediante escrito enviado el 30 de noviembre de 2021 expuso nuevos argumentos por los cuales se debe acceder a la misma y que los mismos, en la providencia del 24 de enero de 2022, no fueron considerados, de manera razonada y con fundamento en el ordenamiento jurídico, ni para acogerlos, ni para apartarse de ellos.

Por todo lo anterior solicita reponer la decisión del **24 de enero de 2022 de noviembre de 2021** y, en su lugar, proceda a anular o a dejar sin efecto las decisiones del 08 y 25 de noviembre de 2021; a tener por notificada a la demandada de las providencias del 27 de marzo de 2017 y del 09 de junio de 2017 por conducta concluyente; a tener por vencidos los términos para proponer excepciones de fondo; a requerirla para que dé cuenta de la tomada de nota del embargo de las acciones y para que deposite los dividendos, utilidades, intereses y demás beneficios que al derecho embargado correspondan, desde que le fue comunicada la orden de embargo; a proceder de conformidad con lo ordenado en el numeral 6 del art 593 del C.G.P, aplicable por disposición del art 145 del C.P.T y de la S.S.; a compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación en contra del representante legal y de los miembros de la junta directiva de la entidad demandada, por el incumplimiento de las órdenes comunicadas mediante oficios 513 del 27 de marzo de 2017 y 834 del 09 de junio de 2017 y por el incumplimiento de las sentencias proferidas en primera y en segunda instancia dentro de este proceso que presuntamente configuran la conducta delictiva denominada fraude a resolución judicial o administrativa de policía descrita en el art. 454 del Código Penal y a pronunciarse sobre la solicitud de decreto y practica de embargo sobre los bienes muebles de la demandada que se encuentran en su sede principal.

En subsidio de lo anterior o en el evento de que se considere improcedente el recurso de reposición contra la providencia del 24 de enero de 2022, se solicita

revocar o modificar la misma en los sentidos señalados y atendiendo a lo expuesto y a los pronunciamientos del Consejo de Estado en la Sentencia del 30 de agosto de 2012, para el radicado 11001-03-15-000-2012-00117-01 (AC) M.P. MARCO ANTONIO VELILLA MOREN y a los pronunciamientos de la Corte Suprema De Justicia en Sentencia del 28 de junio de 1979 M.P. Alberto Ospina Botero; en Sentencia No. 286 del 23 de julio de 1987 M.P. Héctor Gómez Uribe; en Auto No. 122 del 16 de junio de 1999 M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss; en Sentencia No. 096 del 24 de mayo de 2001 M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno; en Sentencia del 16 de julio de 2009 M.P. William Namén Vargas para el radicado 68001-22-13-000-2009-00206-01 y en la providencia del 12 de abril de 2012, al decidir el expediente T. N° 1100122030002012-00323-01, Magistrado Ponente: FERNANDO GIRALDO GUTIERREZ, en Sentencia No. 12176 del 19 de septiembre de 2018 M.P. Luis Alonso Rico Puerta; en Sentencia No. 12467 del 26 de septiembre de 2018 M.P. Luis Alonso Rico Puerta, que indican, en términos generales, que los errores no atan al juez, ni a las partes, que las decisiones ilegales, aunque estén ejecutoriadas, no atan al juez, ni a las partes, no cobran ejecutoria.

En subsidio de lo anterior, solicita se entienda este escrito como interposición y sustentación del recurso de apelación en contra del auto del 24 de enero de 2021 y en subsidio de lo anterior o en el evento de que se considere improcedente el recurso de apelación contra la providencia del 24 de enero de 2022, entiéndase este escrito como complementación de los argumentos que fueron expuestos para interponer y sustentar el recurso de queja en contra de la decisión del 08 de noviembre de 2021.

Por lo anterior procede la Sala a realizar el estudio del recurso de queja con fundamento en las siguientes

CONSIDERACIONES

Respecto a la interposición y trámite del recurso de queja establece el artículo 353 del C.G.P lo siguiente:

“ARTÍCULO 353. INTERPOSICIÓN Y TRÁMITE. El recurso de queja deberá interponerse en subsidio del de reposición contra el auto que denegó la

apelación o la casación, salvo cuando este sea consecuencia de la reposición interpuesta por la parte contraria, caso en el cual deberá interponerse directamente dentro de la ejecutoria.

Denegada la reposición, o interpuesta la queja, según el caso, el juez ordenará la reproducción de las piezas procesales necesarias, para lo cual se procederá en la forma prevista para el trámite de la apelación. Expedidas las copias se remitirán al superior, quien podrá ordenar al inferior que remita copias de otras piezas del expediente.

El escrito se mantendrá en la secretaría por tres (3) días a disposición de la otra parte para que manifieste lo que estime oportuno, y surtido el traslado se decidirá el recurso.

Si el superior estima indebida la denegación de la apelación o de la casación, la admitirá y comunicará su decisión al inferior, con indicación del efecto en que corresponda en el primer caso”.

De lo anterior se desprende con meridiana claridad que la naturaleza del recurso de queja es solo con el fin de determinar si la providencia que denegó la apelación o la casación, se encuentran ajustadas a derecho, o si, por el contrario, debió concederse dicho recurso para que fuera estudiado por el superior, y no para a través del mismo, estudiar o dirimir asuntos que le correspondan a la primera instancia.

Teniendo claro lo anterior se harán las siguientes precisiones para el caso bajo estudio.

Mediante escrito del 12 de noviembre de 2021, documento 3 del expediente digital, la apodera judicial de la parte ejecutante presentó solicitud de modificación, revocatoria **o recurso de apelación** contra el auto proferido el 08 de noviembre de 2021, en el cual se le requirió para que procediera a la notificación del mandamiento de pago.

Dicha decisión fue negada por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín mediante auto del 25 de noviembre de 2021, argumentando en síntesis que el ejecutado solo se había notificado parcialmente del auto del 13 de octubre de 2016, y no del auto del 27 de marzo de 2017, que adicionó y modifico el mandamiento de pago; y respecto al recurso de apelación interpuesto contra dicha providencia indicó que el mismo era improcedente, al considerar que dicho auto era de sustanciación y no se encontraba dentro de los enmarcados en el artículo 65 del CPTSS.

En el mismo escrito del 12 de noviembre de 2021, la apoderada de la parte ejecutante solicita se ordenara expedir y enviar, a quien corresponda y entre otras, a la Superintendencia de Sociedades de Colombia, la comunicación en la que se informe de la existencia del crédito, de la existencia del presente proceso, del decreto de medidas cautelares y en la que se requiera darle al crédito el tratamiento conforme lo dispone el art 157 del C.S.T, solicitud está a la que accedió el despacho mediante auto del 25 de noviembre de 2021, ordenando proceder a comunicar a la Superintendencia de Sociedades de Colombia, de la existencia del crédito, que consta en los dos mandamientos de pago, proferidos , uno el 13/10/16 y el otro el 27/03/17, en los términos de la solicitud de la parte actora.

De igual forma en escrito del 12 de noviembre de 2021, la parte ejecutante solicitó, ante el incumplimiento por parte de la demandada de las órdenes comunicadas mediante oficio 513 del 27 de marzo de 2017 y 834 del 09 de junio de 2017, se proceda de conformidad con lo ordenado en el numeral 6 del art 593 del C.G.P, aplicable por disposición del art 145 del C.P.T y de la S.S., a compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación en contra del representante legal y de los miembros de la junta directiva de la entidad demandada, por el incumplimiento de las órdenes comunicadas mediante oficios 513 del 27 de marzo de 2017 y 834 del 09 de junio de 2017 y por el incumplimiento de las sentencias proferidas en primera y en segunda instancia dentro de este proceso que presuntamente configuran la conducta delictiva denominada fraude a resolución judicial o administrativa de policía descrita en el art. 454 del Código Penal..”; La anterior solicitud fue resuelta de forma negativa por el Juzgado mediante auto del 25 de noviembre de 2021, argumentando en síntesis que no se observa causal alguna para tal fin en el art 593 del CGP como lo afirma la peticionaria, y que el no cumplimiento de la sentencia que hoy sirve de base de recaudo, se configura como causal para efectuar dicha compulsa, dado que para ello contempla la Jurisdicción Ordinaria Laboral el proceso ejecutivo.

En virtud de lo anterior la apoderada de la parte ejecutante mediante escrito del **30 de noviembre de 2021**, solicitó reponer la decisión del 25 de noviembre

de 2021 y, en su lugar, proceder a tener por notificada de las providencias del 27 de marzo de 2017 y del 09 de junio de 2017, por conducta concluyente.

Las peticiones anteriores contentivas de recurso de reposición en subsidio el de queja, contra el auto proferido el 25 de noviembre de 2021, que resolvió solicitudes y negó recurso de apelación fueron resueltas por el juzgado mediante auto del **24 de enero de 2022**, (PDF 08), reiterando que la notificación del mandamiento de pago debe hacerse al ejecutado de forma personal atendiendo a lo consagrado en los artículos 41 del C.P.T y ss, y 290 del C.G.P, y que para el caso bajo estudio la primera providencia que debe ser notificada personalmente consta de las providencias emitidas el 13 de octubre de 2016 y el 27 de marzo de 2017, precisando de esta forma que solo existe una notificación al ejecutado de forma parcial al haberse notificado mediante acta del 20 de mayo de 2017.

Partiendo de lo anterior se advierte que todos los argumentos expuestos por la apoderada de la parte ejecutante en el recurso de queja que se revisa en esta oportunidad son argumentos de fondo por los cuales considera dicha apoderada que si se debe tener por notificado por conducta concluyente al ejecutado, mas no son argumentos tendientes a demostrar las razones jurídicas por la cuales si se debe conceder el recurso de apelación frente al auto el 08 de noviembre de 2021, en el cual se le requirió para que procediera a la notificación del mandamiento de pago.

Conforme lo mencionado se debe precisar que el auto del 08 de noviembre de 2021, por medio del cual se requirió a la parte ejecutante para que procediera a la notificación del mandamiento de pago, es un auto de sustanciación, los cuales según lo consagrado en el artículo 64 del C.P.L no son susceptibles de recurso alguno, por lo que el recurso apelación pretendido por la apoderada de la parte ejecutante es totalmente improcedente, por lo que debe DECLARARSE bien denegado el recurso de apelación en este sentido.

En razón de lo anterior debe advertirse que también es notoriamente improcedente la solicitud de anular o a dejar sin efecto las decisiones del 08 y 25 de noviembre de 2021 y tener por notificada a la demandada de las

providencias del 27 de marzo de 2017 y del 09 de junio de 2017 por conducta concluyente, pues debe tenerse en cuenta además que las providencias que resuelven dichas solicitudes no se encuentran taxativamente enumeradas dentro de las consagradas en el artículo 65 del C.P.T y ss, como susceptibles del recurso de apelación.

Ahora, las otras solicitudes de la parte ejecutante si bien no se relacionan estrictamente con el recurso de queja, se pronunciará la Sala sobre las mismas en el siguiente sentido, dejando claro, que no tendría motivo alguno para pronunciarse sobre las mismas dado que lo que se revisa en esta oportunidad es si la negación del recurso de apelación de primera instancia se encuentra o no ajustada a derecho.

En concordancia con lo manifestado, la solicitud de requerir a la ejecutada para que dé cuenta de la tomada de nota del embargo de las acciones y para que deposite los dividendos, utilidades, intereses y demás beneficios que al derecho embargado correspondan, desde que le fue comunicada la orden de embargo, y de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación en contra del representante legal y de los miembros de la junta directiva de la entidad demandada, por el incumplimiento de las órdenes comunicadas mediante oficios 513 del 27 de marzo de 2017 y 834 del 09 de junio de 2017 y por el incumplimiento de las sentencias la misma ya fueron resueltas por el Juzgado mediante auto del 25 de noviembre de 2021, por lo que la misma es improcedente, cosa diferente es que la parte ejecutante no esté de acuerdo con las razones argumentadas por a quo para la negación de dichas solicitudes, o que considere que no se resolvieron de fondo todos sus argumentos o solicitudes, caso en el cual la apoderada debió solicitar la adición de la providencia en los términos del artículo 287 del C.G.P, y no pretender, a través del recurso de queja presentado en esta oportunidad, que se resuelvan las mismas de forma anexa al recurso presentado pues las mismas son notoriamente improcedentes en dichos términos.

Por lo anterior, lo legal y pertinente, será declarar BIEN DENEGADO el recurso de apelación, por las razones adicionales expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En razón de lo anterior, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL,

RESUELVE

PRIMERO: Se **DECLARA BIEN DENEGADO** el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte ejecutante contra el auto emitido por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, el 08 de noviembre de 2021, por ser improcedente dicho recurso y no ajustarse a los requisitos legales para su interposición, según lo argumentado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión por ESTADOS y devuélvanse las diligencias al Juzgado de origen, para lo de su competencia.

Los Magistrados,



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
– SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 055 del 30 de marzo de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>